

AGENDA CIUDADANA

UN DEBATE SOBRE MEXICO... SIN MEXICO

Lorenzo Meyer

Dilema. En Nueva Orleáns no los vieron bien pero los necesitaron para limpiar la ciudad y reconstruir parte de lo destruido por el huracán. No deberían estar en Oregón, pero hoy constituyen la mitad de los cinco mil bomberos que, contratados por empresas privadas, están combatiendo los incendios forestales en la costa del noroeste norteamericana. Son parte de los trabajadores mexicanos indocumentados en Estados Unidos. No deberían estar ahí, pero ahí están. El dilema norteamericano es, en principio, simple: ¿se les expulsa o se les integra?

La Cerca. Robert Frost inició su serie de 16 poemas “North of Boston”, con uno titulado “Reparando la cerca” (*Mending Wall*). En él, pone en duda la razón de ser de esa idea que asegura: “la buena cerca hace al buen vecino”. Para Frost, por el contrario, siempre “hay algo que impide querer a una barda” (*Something there is that doesn't love a wall*). ¿Su razón? que lo que queda de un lado expulsa a lo que queda del otro. La erección de un muro siempre implica una ofensa. Lástima que Frost murió hace 43 años, pues él hubiera sido hoy la persona ideal para preguntar en Estados Unidos si realmente es necesario que se construya en su frontera sur esa barda triple de 596 kilómetros propuesta por el senado –en realidad una muralla- para supuestamente aumentar su seguridad pero en realidad para dejar fuera a los cuatrocientos mil que anualmente cruzan la frontera mexicano-americana en busca de trabajo.

Invitado de Piedra. De tiempo atrás se veía venir el momento en que el tema de los trabajadores indocumentados quedaría en el centro del debate interno norteamericano. Tras posponer por años la decisión, desde fines del 2005 la clase política del país vecino se ha visto llevada a colocar en el primer lugar de su

agenda doméstica el tema de los once o doce millones de extranjeros indocumentados que ya están insertados en la estructura laboral norteamericana pero no en la legal.

El qué hacer con millones de indocumentados que son funcionales a la economía pero disfuncionales a la legalidad y a la estructura social y cultural de Estados Unidos, es hoy un tema que parte en dos a la sociedad norteamericana, donde el compromiso es difícil y una solución clara y efectiva es casi imposible. La discusión sobre los desenlaces probables –expulsarlos, assimilarlos o una combinación de ambos enfoques-, se da con fuerza lo mismo en los medios masivos de comunicación, que en los corredores del poder, en la academia o en el seno de las iglesias. Y los argumentos que se esgrimen son tanto empíricos como éticos, legales como políticos, racionales como emocionales.

La Impotencia. El resultado de la discusión y del choque de intereses en Estados Unidos en materia migratoria promete ser histórico –se discute la naturaleza misma de la sociedad norteamericana frente “al otro”- y va a afectar la vida de millones de personas muy vulnerables, como ocurrió en situaciones semejantes en los dos siglos pasados. Sin embargo, y no obstante las declaraciones del presidente Fox, es frustrante reconocer que es muy poco lo que en esta coyuntura el gobierno mexicano puede hacer y que, además de organizarse y marchar en abril y el 1° de mayo, tampoco es mucho lo que pueden hacer los mexicanos de allá. Se trata de un asunto de soberanía y el poder político que inclinará la balanza en uno u otro sentido, está, finalmente, en los votantes norteamericanos que van a premiar o castigar a los candidatos que se han pronunciado por ser duros o blandos en materia de regularizar a los integrantes de la última oleada de inmigrantes que arribó a Estados Unidos pero que, a diferencia

de la mayoría del pasado, éstos no pidieron permiso para entrar e instalarse en las márgenes de una poderos sociedad creadora de empleo.

En Estados Unidos, aceptar o rechazar a los trabajadores extranjeros que laboran sin permiso, es materia de soberanía y en el país más soberano del mundo, puesto que, por un lado, sí puede tomar decisiones unilaterales que afectan a otros y, a la vez, impedir con relativo éxito ser afectado por decisiones tomadas por esos otros. México, en cuanto entidad política, por carecer de poder, simplemente no está invitado ni puede invitarse a participar en la discusión sobre el destino de la gran comunidad de los mexicanos “sin papeles” al norte del Bravo. En el mejor de los casos, nuestro gobierno puede esperar ser informado y hasta escuchado pero no es un actor efectivo en el drama migratorio que se está desarrollando a orillas del Potomac.

Las Fuerzas en Pugna. Los términos de la batalla sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son ya relativamente claros, aunque no su resultado. Por un lado están los elementos más liberales –generalmente demócratas- que en este tema coinciden con los grandes, medianos y pequeños intereses empresariales –generalmente republicanos- que se benefician con la presencia de mano de obra barata, abundante y dócil. La personificación de esa fuerza liberal son los senadores Edward Kennedy y John MacCain, demócrata uno y republicano otro y que, en esta coyuntura, coinciden con la posición adoptada por el presidente George W. Bush, cuyos intereses y experiencia personales en Texas con trabajadores mexicanos, juegan un papel importante.

Desde la posición liberal, el problema de los millones de indocumentados no se puede resolver por completo pero sí se puede controlar. Para ello, según un proyecto de ley aprobado el 25 de mayo en el senado por 62 votos contra 36, hay,

primero, que reforzar el muro fronterizo (370 millas de muro y 500 más con obstáculos para vehículos) y el aparato de vigilancia para hacer más difícil el cruce no autorizado (la Patrulla Fronteriza tendrá para el 2011, 14 mil efectivos adicionales a los 11,300 actuales). Luego crear documentos infalsificables para identificar a los trabajadores legales y castigar al empleador si no los revisa. Aceptar a los trabajadores sin documentados con más de cinco años de residencia, pero previo pago de una multa (3,250 dólares) e impuestos. Aquellos con residencia entre dos y cinco años, deberán llegarse a un punto fronterizo y llenar una solicitud para ingresar de nuevo. Los que tengan menos de dos años deberán abandonar el país. Finalmente, un programa de 200 mil visas anuales y otro especial para la agricultura.

Los elementos más conservadores de la sociedad norteamericana se oponen a este plan que es relativamente realista y humanitario. Esta oposición que no quiere “amnistía” para nadie, se organizó sorpresivamente en la Cámara de Representantes el año pasado y terminó por adelantarse con su proyecto a los liberales y a un presidente preocupado con temas como Irak o la conformación de la Suprema Corte. Su proyecto de ley es exclusivamente punitivo, tiene el apoyo del 75% de los diputados y no admite que ningún indocumentado pueda documentarse y conseguir la ciudadanía. Estos “halcones” en el tema de la inmigración, están perfectamente encarnados en el diputado republicano por Wisconsin, F. James Sensenbrenner Jr. que, en contra del deseo del presidente, logró que su cámara pasara al final del 2005 un proyecto de ley que sólo se preocupa por el aspecto del castigo en este complejo tema. Para Sensenbrenner, para la mayoría de sus colegas y para millones de norteamericanos, los trabajadores indocumentados –en su mayoría latinos- son transgresores de la ley y por ello no tiene legitimidad su

pretensión de ser aceptados en un “país de leyes”; ninguna justificación de carácter económico es legítima frente al hecho de que el marco legal ha sido violado. Tolerar ilegalidades por razones materiales –el beneficio que trae al aparato productivo norteamericano mano de obra barata y relativamente joven en la época de la competencia global y en un país en proceso de envejecimiento- es poner en entredicho un punto innegociable de la cultura de Estados Unidos: que en una nación de leyes, quien las viola no pueden ser aceptado como parte de la comunidad pues eso cambiaría el carácter mismo del país.

No tiene hoy sentido esgrimir argumentos de justicia sustantiva ni que hubo un tiempo en que los norteamericanos migrantes violaron la legalidad vigente –las leyes mexicanas en Texas en los 1830-, ni que las leyes migratorias no son divinas y se pueden cambiar. Al final, todo va a depender no del sentido de la justicia sino de cómo se den las elecciones legislativas norteamericanas de noviembre y de la capacidad de los empleadores para defender su uso y abuso de la mano de obra barata.

Al final, volvemos a lo ya sabido: como mexicanos, lo importante es crear, aquí, el empleo que muchos buscan allá, donde los usan pero no los quieren.

RESUMEN: “El qué hacer con millones de indocumentados que son funcionales a la economía pero disfuncionales a la legalidad y a la estructura social y cultural de Estados Unidos, es hoy un tema que parte en dos a la sociedad norteamericana”